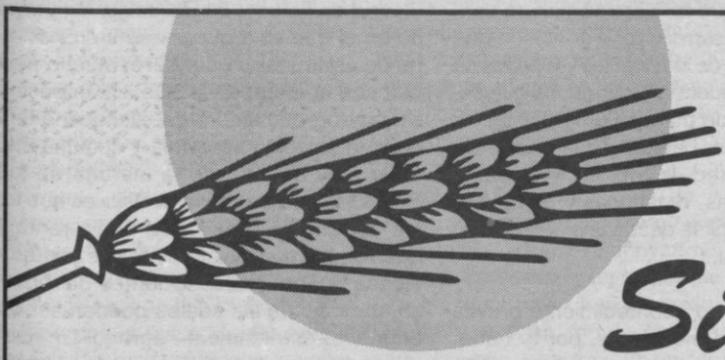


EL INCIERTO FUTURO DEL CAMPO



SUPLEMENTO ICAL



Siempre con el campo



Caja Salamanca y Soria

Corresponsabilidad para avanzar

PEDRO SOLBES MIRA

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

La política agraria en España se enmarca en dos realidades ineludibles: nuestra pertenencia a la CE y el reparto competencial con las comunidades autónomas. Desde nuestra adhesión a la Comunidad, las acciones comunitarias en la agricultura y ganadería han supuesto un refuerzo modernizador para nuestro sector, al tiempo que han aportado importantes cantidades de fondos para regulación de mercados y orientación de la actividad en el mundo rural. En este marco, los ministros de Agricultura de la Comunidad aprobamos la Reforma de la Política Agrícola Común. Esta decisión supone el cambio de reglas para sectores de vital importancia para Castilla y León, como los cultivos herbáceos, el vacuno, las oleaginosas o el ovino. Cambio que es una clara mejora respecto a la situación anterior con paquetes de precios cada vez más restrictivos y sin compensaciones.

Los estudios elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indican que los fondos que recibirá la agricultura de Castilla y León de las arcas comunitarias se multiplicarán por tres en los próximos ejercicios. Es esta una buena noticia y creo, sinceramente, que la Reforma aprobada es la mejor de las posibles para las características del sector. Además, el nuevo régimen agromonetario ha supuesto subidas de los precios instrumentales de más del 10%.

Las ayudas que articulamos las distintas administraciones no buscan sustituir los ingresos por el trabajo propio, ni deseamos que conviertan a agricultores y ganaderos en cultivadores de subvenciones sin tener en cuenta su producción, la demanda y las necesidades de la sociedad. Los fondos públicos pueden ayudar, regular y complementar la actividad productiva del sector primario pero nunca sustituirán a los rendimientos de las explotaciones y del trabajo. Y es que la parte más importante de la renta de los agricultores dependerá de la capacidad de modernizarse y de prepararse para ganar mercados y consumidores. Para ayudar en es-

te marco continuaremos arbitrando medidas coyunturales y estructurales dentro de la política agraria nacional. Por citar algunas de las más recientes, el Consejo de Ministros acaba de aprobar el real Decreto sobre Reforestación de tierras agrarias, con inversiones de 156.000 millones de pesetas y el objetivo de repoblar más de 600.000 hectáreas, en el que hemos hecho un esfuerzo para ofrecer una alternativa sólida a muchas hectáreas poco rentables. Igualmente, el Gobierno ha suprimido las cotizaciones por jornadas teóricas del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, una de las reivindicaciones históricas del sector. En los próximos días aprobaremos el nuevo programa de jubilación anticipada, con el que pretendemos ofrecer una salida a muchos agricultores mayores, al tiempo que se presentan posibilidades de acceso a la actividad agraria en buenas condiciones a otros jóvenes agricultores.

Todas estas medidas forman parte del esfuerzo continuado que el Gobierno presta a la agricultura de nuestro país para darle la posibilidad de competir en el mercado abierto en el que nos encontramos. El tamaño de nuestras explotaciones, su modernización, la formación, la edad de la población activa, la falta de asociacionismo y cooperativismo, etc., son los problemas diagnosticados en el Programa de modernización que presentamos hace un año al sector, para los que se recogen soluciones en el Acuerdo Marco firmado con las organizaciones Agrarias el 23 de mayo de 1992.

En su desarrollo, hemos presentado recientemente el Anteproyecto de Ley de modernización de las explo-

taciones agrarias, con importantes medidas legales y fiscales para alcanzar el objetivo modernizador marcado. Pretendemos discutirlo y consensuarlo con las opas y las comunidades autónomas en el más breve espacio de tiempo, para presentarlo en el Parlamento antes del final de esta legislatura.

Y, para completar las actuaciones nacionales, vamos a presentar a los gobiernos autonómicos un convenio sobre gestión y pago de las ayudas a la agricultura en desarrollo del Acuerdo Marco que les presentamos hace unos meses. Es un paso más en la necesaria coordinación y corresponsabilidad en la aplicación de la política agraria a las que estamos obligados. El objetivo final es conseguir las mejores condiciones para que agricultores y ganaderos desarrollen su trabajo y simplificarles sus relaciones con las distintas Administraciones. Creemos que estos fines no los alcanzaremos desde el enfrentamiento. El mejor beneficio para el sector sólo lo lograremos en el diálogo y la colabo-

ración, en la corresponsabilidad de las actuaciones, sin perder de vista los intereses y las necesidades de las diecisiete comunidades autónomas y todos los sectores agrícolas y ganaderos

Si somos capaces de aunar esfuerzos en vez de sembrar la división o el desconcierto, tendremos asegurado el porvenir. La agricultura española tiene futuro, un futuro claro y positivo pero distinto a lo que hemos conocido hasta ahora. Ayudar a conseguirlo es la responsabilidad del Gobierno y debe serlo también de todos aquellos que tienen responsabilidad en la materia.



La definitiva internacionalización de nuestra agricultura

JOSE RAMON MENDOZA

Director de Comunicaciones Agrarias

Dejando de lado el problema suscitado por la fuerte sequía que padecemos el pasado año, este período de tiempo marcado por acontecimientos de carácter comunitario, pero que tendrán —de hecho ya están teniendo— una fuerte y profunda influencia en el futuro de nuestro sector agrario, de nuestro modelo de agricultura y de medio rural. Reforma de la PAC, primero, preacuerdo del GATT, después, y en las postrimerías del año, la finalización del período transitorio de integración de la agricultura española en la comunitaria. Pero, de alguna manera, esto es agua pasada y hay que mirar hacia adelante, al futuro.

Si 1992 fue el año de las firmas, 1993 será el de la puesta en práctica de lo rubricado. La reforma de la PAC traerá consigo un cambio radical en la concepción del modelo de producción agraria, sobre todo en zonas donde, como Castilla y León, predominan los cultivos extensivos. Pasar de una agricultura en la que se producía basando la rentabilidad en el precio y, por tanto, en la obtención de la mayor productividad posible, a otra en la que parte de la renta se encuentra garantizada por subvenciones y en la que lo que prima no es producir más a menos coste, sabiendo que la intervención comparará el excedente existente, sino menos y que lo que se coseche o produzca ten-

drá que atenerse a las reglas del mercado, es un cambio radical en el modelo de producción agrícola que, sin duda, traerá también sus consecuencias en las formas de vida del medio rural.

En primer lugar, que el producto tenga un precio fluctuante, en función de las circunstancias del mercado, hará que el agricultor, si no se quiere limitar a ser un mero receptor de subvenciones, tenga que dedicar un mayor tiempo, adquirir una mejor preparación en aspectos de gestión y dedicar más esfuerzos a disponer de información especializada. Ya no va a bastar con producir todo lo que se pueda. A partir de ahora habrá que estar muy al tanto de lo que demanda el mercado, en variedades, calidades, momentos, etc... y a unos costes que hagan rentables sus producciones en las condiciones del mercado libre. Esto, indudablemente, puede ser un acicate para la modernización del sector, siempre y cuando desde las distintas administraciones se pongan los medios, económicos y legislativos, necesarios para que los agricultores familiares puedan hacer frente a las inversiones necesarias para hacer frente a estos retos. No podemos olvidar que, en la actual situación de endeudamiento del sector, el agricultor medio no dispone de capacidad crediticia para modernizarse por medio, exclusivamente, de su propio esfuerzo.

Estas nuevas condiciones también influ-

rán en la creación de un modelo nuevo de asociacionismo económico en el campo que ha de basarse en figuras como la cooperativa, SAT, etc... como empresa. Pero la reforma de la PAC también puede generar lo contrario. El agricultor puede caer en la tentación, y quizá sea uno de los objetivos perseguidos, de vivir subvencionado, produciendo lo mínimo imprescindible para asegurarse la subvención y gastando lo mínimo posible en la producción. Esto podría llevar, sobre todo en zonas de baja productividad, a la generación de una agricultura subvencionada que, quizá, fijaría gente en el campo en los límites de la subsistencia pero que de ninguna manera contribuiría a un desarrollo rural armónico que dignifique la vida de los pueblos y la profesión agraria. No se puede olvidar nunca que éste, concebido de manera progresista, ha de ser dinámico, basado en la existencia de una amplia red de explotaciones familiares, modernas, dinámicas y competitivas, y no concebirse desde una concepción de auxilio social.

En 1993, otro acontecimiento gravita sobre el campo europeo y, por lo tanto, sobre el castellano-leonés. El preacuerdo del GATT. Mucho se ha escrito sobre él. La oposición francesa, la cuestión del girasol, las restricciones a las exportaciones de cereales, etc... Sin embargo, para nosotros, para España, para Castilla y León, otros aspectos han de ser más preocupantes.

La carne de vacuno o el vino, por ejemplo, cuyas exportaciones pueden verse reducidas, en algunos casos hasta el 50%, y en el que el preacuerdo del GATT va a condicionar la reforma de la OCM en un sentido determinado de antemano y condicionado a cuestiones ajenas a lo que la propia Comunidad pueda decidir soberanamente.

Entramos, por tanto, en un período en el que la internacionalización de nuestra agricultura será definitiva. Un tiempo en el que los centros de decisión se alejarán cada vez más, de la autonomía, de Madrid e, incluso, de Bruselas. Un período en el que va a generarse un nuevo tipo de agricultor o ganadero, mucho más cercano al empresario que al campesino o labrador; que tendrá que conocer a fondo la legislación española y comunitaria, estar muy al tanto de la marcha de los mercados porque de las decisiones que tome dependerá gran parte de su renta y que tendrá que diversificar sus producciones cuando no sus fuentes de ingreso, muchas de las cuales pueden ser de origen no estrictamente agrario. Un nuevo modelo agrario muy diferente al hasta ahora conocido. Que sea mejor o peor dependerá de la actitud del agricultor, pero también será responsabilidad de las distintas administraciones públicas, central y autonómica, y, por supuesto, de las organizaciones profesionales agrarias.



La PAC busca ingresos alternativos para productores no competitivos.

LORENZO MATIAS

Europa busca rutas alternativas para el agricultor

La PAC estructura fórmulas de desarrollo rural para evitar el despoblamiento

JOSÉ RAMON MENDOZA

Director de Comunicaciones Agrarias

En el marco de la estrategia del Ministerio de Agricultura para la modernización y mejora de las rentas del campo, el desarrollo rural, junto con la modernización del sector agroalimentario y la conservación del medio natural, constituye uno de los ejes que parece querer guiar la política agraria de nuestro país.

Es lógico, la actividad agraria siempre ha estado inscrita, en España y en Castilla y León, en el propio contexto del mundo rural. Si esto había sido olvidado en los momentos álgidos de nuestro desarrollo económico, donde lo que primaba era más la necesidad de proporcionar alimentos en cantidad y precio asequible a una población urbana en continuo crecimiento, logrado gracias a los excedentes de mano de obra rural, aquella realidad se está viendo ahora potenciada y convertida en objetivo económico, social y político por la reforma de la PAC. Esta plantea no sólo establecer un mayor vínculo entre agricultor y protección del entorno natural, sino que también propugna fuentes alternativas de rentas en un medio rural fuertemente amenazado por el peligro del despoblamiento.

De esta manera, el futuro del mundo rural de la CE —comunidad formada por países de una amplia tradición rural aunque en muchos de ellos el sector agrario sea absolutamente minoritario—, se encuentra directamente relacionado con los cambios que se quieren introducir en la PAC, en la que se quieren complementar por la vía de desarrollos alternativos los perjui-

cios que puede traer consigo las políticas restrictivas de producciones y precios agrarios

Es en este contexto en el que las medidas de desarrollo rural han de situarse para frenar las actuales tendencias de ese medio, como despoblamiento, bajo equipamiento público y privado y descapitalización humana. Pero, sobre todo, el poco prestigio social que en estos momentos tiene, tanto al ser un profesional de la actividad agraria, como el ser habitante de un pueblo. Factor psicológico que hace primar —incluso en los mismos pueblos— los valores urbanos frente a los rurales creando una especie de complejo de inferioridad que potencia los movimientos migratorios hacia las ciudades y núcleos urbanos, sobre todo de sus elementos humanos más dinámicos.

Complejo mundo

La complejidad del mundo rural es enorme. En primer lugar porque no es un mero concepto geográfico sino, más bien, un tejido socioeconómico en el que se inscriben un amplio y diverso conjunto de actividades de las cuales la agraria constituye, especialmente en comunidades como Castilla y León, el esqueleto económico y social sobre el que se apoyan las demás. En segundo lugar porque no existe un único tipo de medio rural; así el Ministerio de Agricultura distingue «tres tipos de mundo rural, con problemáticas muy diferentes», perfectamente aplicables a la realidad castellano-leonesa.

Un mundo rural próximo a las grandes urbes, sometido a las influencias y, por lo tanto, presiones de sus respectivas zonas

La CE quiere complementar los perjuicios de las políticas restrictivas de producciones y precios agrarios

No se concibe el desarrollo sin la existencia de una agricultura viva, productiva y competitiva

metropolitanas. Un ejemplo sería la zona de Laguna de Duero, cercana a Valladolid. Son zonas y comarcas con buenas, o relativamente buenas, oportunidades económicas, fundamentalmente urbanísticas y de servicios de tipo empresarial o, fundamentalmente, relacionados con oferta de ocio, pero que sin embargo, debido a estas características, plantean ya fuertes problemas de carácter medio ambiental.

Lo que se puede definir como «medio rural clásico», fundamentalmente agrario, pero sometido a un constante flujo migratorio y a una deficiencia estructural de recursos y equipamientos locales lo que, además de acentuar la tendencia al abandono de los más jóvenes y emprendedores, es un pesado lastre para asegurar un posible despegue económico.

Son estas zonas más típicamente agrarias y abundantes en Castilla y León, en las que se hace más imprescindible la armonización de políticas de modernización de la estructura agraria con políticas alternativas de desarrollo rural. Zonas donde es imposible concebir éste sin una agricultura dinámica, desarrollada y basada en la existencia de un número importante de pequeños y medianos agricultores y ganaderos familiares que aseguran la base social de la zona y que generen la suficiente riqueza como para servir de soporte a otras actividades alternativas que, en ningún caso, pueden ni deben desplazar a la agricultura como actividad económica básica. Nadie puede concebir el desarrollo de una Tierra de Campos, o de una Moraña, por citar dos comarcas que entrarían en este tipo, sin la existencia de una agricultura viva, productiva y comercialmente competitiva.

El mundo rural deprimido —profundo le llama el documento del Ministerio de Agricultura— situado en las zonas más periféricas y alejadas, sin acceso al desarrollo económico global, sin equipamientos ni públicos ni privados, con muy baja densidad de una población muy envejecida y con pocas, por no decir nulas, posibilidades de un desarrollo agrario ya que sus condiciones climáticas, geográficas, edafológicas, etc... condicionan muy negativamente la misma.

Estas zonas, entre las que se encuentran las montañas que rodean Castilla y León (Gredos, Ancares, Soria, etc...), precisan de fuertes inversiones, respetuosas con un medio ambiente generalmente poco agrado, que sin

embargo repercutirán en poco número de habitantes. Es aquí donde el fomento de actividades alternativas a las puramente agrarias pueden constituir la única forma de generar nuevas rentas, o acrecentar las ya existentes. El agroturismo, la artesanía, los servicios ligados fundamentalmente al ocio y esparcimiento, aprovechando precisamente ese medio ambiente poco agredido, son algunas de ellas.

Esta somera calificación no debe hacernos olvidar que, incluso en el interior de cada una de esas zonas, se está produciendo un distanciamiento de desarrollo social y económico según se encuentren en una determinada situación geográfica: proximidad a centros urbanos, a ejes de desarrollo regional, etc... Circunstancias geográficas o coyunturales, como la construcción de una autovía, pueden traer consigo puntas de desarrollo temporales en una u otra comarca, crecimiento que se acaba con la finalización de la obra, pero que puede ser aprovechado para el relanzamiento de la comarca.

Sobre todo en el segundo y tercer tipo se hace preciso la adopción de importantes medidas de potenciación del medio rural ya que las tendencias demográficas y la debilidad de sus economías pueden conducir a un despoblamiento importante de amplias zonas del territorio nacional. Las medidas de acompañamiento de la PAC, sobre todo las de reforestación recientemente aprobadas, o las medio ambientales, apenas iniciadas, pueden aportar unos fondos de dinero importantes que contribuyan a este desarrollo.



Sin cooperativismo será difícil la pervivencia de las explotaciones de tamaño medio.

LORENZO MATIAS

Cooperativas: profesionalidad para escapar de la crisis

Se las considera el mejor instrumento para el desarrollo agrario

ICAL

La falta de dimensionamiento y capacidad de concentración de oferta suficiente para adaptarse a las necesidades del mercado y una gestión incorrecta debida en gran medida a la pervivencia de conceptos paternalistas, derivados de los inicios del movimiento cooperativo y a la ausencia de criterios profesionales, son las causas más frecuentes de la mala situación financiera por la que atraviesan algunas empresas cooperativas.

Esta no es, sin embargo, una situación que pueda generalizarse al conjunto de las cooperativas agrarias. Fuentes del Instituto de Fomento Asociativo han negado la existencia de una «crisis» general, subrayando que se trata de casos concretos y aislados derivados de situaciones bien definidas. La figura de la cooperativa seguirá siendo fundamental en la vertebración del sector agrario a partir de ahora, hasta el punto de que «donde no haya cooperativas, con sus características de menores costes, concentración de la oferta, etc... va a ser muy difícil el futuro de las explotaciones de tamaño medio».

Las dificultades provienen de situaciones concretas, por ejemplo la ubicación en áreas geográficas definidas en las que el sector agrario tiene serias dificultades. Esto suele ir unido a una falta de consolidación del tejido cooperativo. Según ASAJA, éste podría ser el caso de las cooperativas características de Castilla y León, o algunas vitivinícolas en Castilla-La Mancha. Como se señala desde estas últimas, «el descenso del consumo, el sobredimensionamiento alcanzado los últimos años y los malos resultados que todo ello ha provocado conducen al abandono de los socios, que realmente no llegan a creer en el futuro de la entidad». En estas situaciones adversas incluso sería más fácil, señalan fuentes cooperativas, conseguir la viabilidad tratándose de empresas privadas.

Gestión inadecuada

La gestión inadecuada y poco profesional es el otro gran lastre de estas entidades. Según datos de un estudio realizado recientemente en Castilla-La Mancha, el setenta por ciento de las cooperativas de esta comunidad autónoma no tiene gerente, y un 15% sitúa en ese

La Administración estudia ventajas fiscales para mejorar las estructuras cooperativas

puesto a alguien relacionado con la estructura directiva por lazos de parentesco. Sólo el 15% restante cuenta con un gerente profesional.

Otro elemento que, según las fuentes consultadas en el IFA, juega contra su supervivencia es el mantenimiento en los órganos directivos de los que fueron líderes del movimiento cooperativo en sus inicios, su influencia en la labor de gestión y lo que ello supone de componente demagógica y paternalista, y de incorporación de criterios políticos. Estas cooperativas funcionan en cierta medida como instituciones sociales, bajo la presión de los socios, y falta el rigor empresarial.

Es quizá aquí donde debe situarse la relación, a veces poco clara o conflictiva, que mantienen con frecuencia sindicatos agrarios y cooperativas. No puede enten-

derse ningún tipo de relación interprofesional en el futuro, señalan fuentes de la Administración, que no cuenta con ambos actores, pero cada uno en su papel: el sindicato, como instrumento vertebrador y de base, y la cooperativa como motor del desarrollo económico. El error que se produce con frecuencia es que las cooperativas fomentan el crecimiento del sindicato, en lugar de ocurrir lo contrario.

A pesar de las dificultades, la cooperativa sigue siendo defendida desde la Administración como el mejor instrumento para el desarrollo del sector agrario y el medio rural —del que en muchos casos constituye la única posibilidad de industrialización—, ya que es el único núcleo que puede permitir sobrevivir a las explotaciones de tamaño medio o pequeño.

El apoyo desde la Administración se plasmará, aseguran, en apoyos fiscales y mejoras en la legislación, pero con un objetivo nuevo y bien definido, del fomento de la creación de nuevas entidades se pasará ahora a apoyar la mejoría de la estructura y configuración del sistema cooperativo.

Esto se traduce en medidas concretas como reducción del

número de cooperativas donde compiten innecesariamente entre sí, integración en número suficiente para lograr una viabilidad mínima (esto permite acceder a un equipo gerencial profesional), y creación de cooperativas de segundo y ulterior grado que realicen tareas de transformación, industrialización y distribución.

Mejora de dimensiones

De hecho, ejemplos hay de que las entidades bien dimensionadas y con actividad diversificada han mejorado sus resultados en los últimos años. Es el caso de ACORREX, que mejoró su volumen de negocio en 2.000 millones de pesetas; ANECOOP, que también aumentó sus resultados en 3.000 millones, o la cooperativa de Guisóna.

Para Francisco Marín, director general de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, no hay más crisis que la media de la empresas privadas, a pesar de que estas sociedades tienen que soportar unas determinadas condiciones, que las hace diferentes a estas últimas.

Marín reconoce que puede haber problemas en algunas cooperativas ganaderas de amortización de inversiones realizadas o por no haber afrontado suficientemente la modernización de sus procesos de producción y comercialización. Pero al igual que las sociedades anónimas, tienen que soportar unos costes productivos elevados de energía, transportes o mano de obra, además de los pagos a sus proveedores y a sus socios cooperativistas.

Así, descarta que haya dificultades generalizadas en las cooperativas fabricantes de piensos, dado que sus costes de manipulación y producción son pequeños. En el cooperativismo vitivinícola, sin embargo, califica la situación de delicada, pero no desde el punto de vista de solidez financiera, sino que los problemas son del conjunto del sector, al tener muchas dificultades para dar salida a sus producciones, añadidas a las que existen para amortizar las inversiones productivas y las liquidaciones a sus socios respectivos.

Las cooperativas lácteas se enfrentan a los problemas de la actual reordenación del sector y a los inconvenientes de no tener una posición de comercialización sólida, como puede ocurrir con las empresas privadas más grandes.

NUESTRO CAMPO ES LA INFORMACION

Agencia ICAL
Santiago, 23, 2º Izq.
47001 - Valladolid
☎ (983) 33 43 33 - 33 43 88
FAX: (983) 34 27 51

Más de 10.000 Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación constituyen el tejido empresarial básico del sector agroalimentario español.

Las Organizaciones de Productores Agrarios centran su actividad económica en la producción y comercialización, beneficiándose de las ayudas españolas y comunitarias.

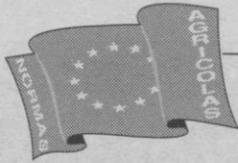
La integración de los procesos de comercialización e industrialización incrementan la participación del Sector Agrario en el valor añadido y mejoran sus rentas.

El asociacionismo agrario: una respuesta



INSTITUTO DE FOMENTO ASOCIATIVO AGRARIO

José Abascal, 56 - 1º Teléfono: 347 58 00 Fax: 347 59 19 28003 Madrid



LA PAC COMIENZA A APLICARSE

Ciento ochenta mil cerealistas han solicitado ayuda compensatoria

La prima completa la pérdida en el precio de los productos agrícolas

ALFREDO LOPEZ

Los agricultores y ganaderos de la región han estado inmersos durante marzo en el intento de cumplir las declaraciones de siembra con las que solicitar las primas compensatorias en cultivos herbáceos. La fecha límite de presentación de instancias ante el SENPA u otros organismos autonómicos se ha establecido hasta el día 31 de marzo, pero, dado lo complicado del sistema, ya se han oído voces desde las organizaciones de productores para instar al Ministerio a que se conceda una prórroga, debido al retraso en la publicación en el BOE y la adaptación posterior de la orden ministerial y entrega de documentos de solicitud al Gobierno autonómico. Al cierre de este monográfico, el plazo establecido seguía siendo el mismo, no descartándose la prórroga.

En Castilla y León serán unos 180.000 agricultores quienes presenten sus solicitudes de ayudas compensatorias, con las que se intenta salvaguardar las rentas agrarias ante el paulatino descenso que registrarán los precios de los cereales en las próximas campañas. Las puertas de los Servicios Comarciales de Agricultura, de los bancos, que no han querido perderse la captación de estos ingresos considerados importantes, y de las organizaciones agrarias y cooperativas han venido estando totalmente abiertas durante estas semanas para recibir las instancias de solicitud.

El caos burocrático ha sido considerable como se esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que se conceden estas ayudas, de corte similar, salvando ciertas distancias, a las que desde campañas se otorgan a los productores de ovino-caprino por la caída anual de sus rentas, según la ponderación de los precios en el mercado.

De los 200.000 millones de pesetas que se esperan para todo el Estado español por este concepto, a Castilla y León le correspondería en torno a un 40 por ciento. Sin embargo, una cosa es cierta: que nadie se engañe ni haga equívocos de opinión pública, ya que todos esos miles de millones vienen únicamente a remendar unas rentas que van a tener el agujero por el lado de los precios cada vez más grande, a fin de que se vaya acercando el precio comunitario—ahora sensiblemente más alto—con el internacional.

Muchos problemas

El agricultor se ha encontrado con muchos problemas en estos días. Uno de ellos ha sido el conocer quién era el propietario de las tierras que venían sembrando desde hace ya muchos años. Ni siquiera los actuales arrendadores



Los agricultores castellano-leoneses recibirán unos 80.000 millones en ayudas compensatorias.

ALBERTO RODRIGO

conocían a nombre de quién estaba tal o cual terreno, que incluso ni figura muchas veces en el registro catastral.

Desde las organizaciones agrarias se insistió ante el SENPA para que flexibilizara el sistema de petición de las ayudas. Lo que se consiguió es que no hiciera falta que figurara en la solicitud el nombre del propietario, sino únicamente el número de parcela y el polígono que ocupa en su término municipal. Con estos datos sería más que suficiente para que el SENPA diera su visto bueno a la solicitud. Únicamente habría dificultades en el raro supuesto de que para una

misma tierra se pidiesen más de una ayuda. Y ahí está bien clara la diferencia: quien va a cobrar la ayuda es quien trabaja la tierra, no el dueño por el mero hecho de tenerla, a pesar de que le entren tentaciones de volverse de nuevo agricultor para simplemente sembrar y recoger ayudas.

Las declaraciones de siembra para cultivos herbáceos, cereales, oleaginosas, proteaginosas, constituyen requisito imprescindible para todos los productores del sector, ya que las primas compensatorias que establece la reforma de la PAC se fijarán a partir de los datos contenidos en esas solicitudes. El no pre-

sentarlas, en principio, antes del día 31 de marzo supone la pérdida automática de todos los derechos.

Ganadería

Del contenido de estas declaraciones se derivarán asimismo los suplementos de pago para el trigo duro en zonas tradicionales, como las de algunas provincias de Castilla y León, y las de ayudas para las leguminosas grano. En el caso de los ganaderos, los datos de las declaraciones referidos a las superficies forrajeras serán también la base para justificar la densidad ganadera de cada explotación y obtener las primas correspondientes

al ganado bovino. La ayuda media por hectárea oscilará entre las 8.000 pesetas en cereal de secano y las cerca de 100.000 pesetas/hectárea en girasol de regadío.

La Consejería pidió al Ministerio que solicitara la prórroga de la tramitación de estas ayudas en los mismos días en que se ha visto retrasada la recepción de los impresos, en línea con la postura de las organizaciones agrarias. La orden fue publicada en el BOE a mediados de febrero. De los 90 días que había en un principio para pedir esta ayuda, se ha pasado a menos de 30, a pesar de que cumplimentar los impresos es complejo.

La Administración autonómica, que no exigirá la célula de regadío, hará una campaña posterior de inspección para comprobar que los datos aportados por el agricultor son ciertos. Habrá sanciones y penalizaciones si las inspecciones que se realicen (por satélite, 250.000 hectáreas; inspección personal, 35.000 hectáreas y un 3% del total de forma selectiva) detectan datos falsos en las siembras. Si, por ejemplo, un agricultor declara en la solicitud de ayuda una superficie superior en un 20%, perdería el derecho a la ayuda. Por cada día laborable de retraso de entrega en la solicitud después de ese 31 de marzo, se penalizará con un 1% de la cuantía de dicha prima. Por último, hasta el 15 de mayo el agricultor contará con tiempo para corregir las ayudas si decide sembrar otros cultivos.

Deprisa y corriendo

Pac 0, Pac 1, Pac 2, Pac 3. Los agricultores y ganaderos de la región se han visto de pronto, y en menos que canta un gallo, embarcados en una frenética carrera por el cumplimiento de documentos de siembra que les permita cobrar en la próxima campaña varios miles de pesetas, que dejarán de percibir por la venta de su cereal en el mercado.

Sería de agradecer para los sufridos cerealistas castellano-leoneses que tanto la Consejería, como el Ministerio de Agricultura mostrasen cierta flexibilidad y amplitud de miras a la hora de dar su visto bueno a las declaraciones de siembra que sean presentadas. Sin querer decir que vayan a admitir cualquier chapuza, pero considerando que es la primera vez, y quizá por ello, que el profesional agrario se enfrenta con más prisas que nunca a una situación que desconoce.

Y habría que tener presente los condicionantes que pueden producirse, por causa de la sequía, que si todavía no es preocupante en nuestra Comunidad, puede serlo en caso de que no arrecien las lluvias esta primavera. Pero también, por el hecho de que los agricultores no han tenido a su disposición los documentos de siembra en el mejor de los casos hasta hace 15 días.

Y por último, y creemos que como razón más contundente, que no tenemos por que ser en esto como equivocadamente somos en otras cosas, «más papistas que el Papa». Si se dice que otros países—Italia, Francia o Alemania— han fijado la fecha de entrega de las declaraciones entre el 30 de abril y el 15 de mayo, a pesar de contar con los mejores servicios y más medios para la tramitación de estas ayudas, aquí no sé por qué tienen que andar deprisa y corriendo los agricultores, exigiéndoles encima que por su bien no tropiecen.



LA PAC COMIENZA A APLICARSE

La sequía en Andalucía impulsa la remolacha en Castilla y León

Las azucareras están fomentando el cultivo con el argumento del alza de precios

C. A.

La sequía que está afectando negativamente a las perspectivas de la cosecha de remolacha en Andalucía puede tener una repercusión importante para esta campaña en Castilla y León. Las industrias azucareras, propietarias de las cuotas de producción, intentarán recuperar en esta zona las disminuciones que se van a producir con casi toda seguridad en la cosecha del sur.

En este sentido, Ebro Agrícolas ha avanzado ya sus previsiones para la próxima campaña y ha comenzado una serie de intervenciones encaminadas a convencer al agricultor de los ventajosos que le resultará económicamente el cultivo de remolacha frente a otras posibilidades.

La campaña de remolacha en Andalucía atraviesa una situación absolutamente crítica por la sequía padecida en los últimos meses, que ha hecho reducirse sustancialmente desde diciembre las previsiones de hectáreas sembradas y de aforos de cosecha, tanto en secano como en regadío. De las 77.000 hectáreas de siembra que se habían previsto en el pasado mes de diciembre para la actual campaña, se ha bajado ahora a las 68.000 hectáreas, y el aforo de cosecha que se hizo en esas mismas fechas, de tres millones de Tm. en la zona sur, ha descendido a 2.300.000 toneladas en la mejor de las circunstancias, se recalca desde el sector.

Esta situación tendrá repercusiones en las restantes zonas productoras -centro y norte de la Península- del territorio nacional, ya que probablemente las industrias traten de contratar en esas áreas la producción que verán mermada en el sur. Precisamente Ebro Agrícolas ha recomendado ya a los agricultores poseedores de la tierra adecuada que se incli-



El beneficio estimado por hectárea de remolacha azucarera es de 216.000 pesetas.

DB

El precio en la campaña 93-94 experimentará un incremento sensible, sobre las 400 pesetas por tonelada

nen hacia el cultivo de remolacha, ya que les garantizará una mayor rentabilidad para su tierra, al asegurarse el contrato y un precio elevado.

Beneficios

Según los datos facilitados por esta empresa azucarera, el beneficio obtenido de la remolacha por hectárea será de 216.000 pesetas, frente a 41.000 del trigo, 46.000

De la existencia de cupos nacionales depende la subsistencia del sector azucarero en Castilla y León y en toda España

del maíz o 42.000 del girasol.

El precio del producto experimentará en la campaña 93/94 un incremento sensible, en torno a las 400 pesetas por tonelada de remolacha. La Cotización se compone de 6.711 ptas./Tm. en concepto de precio A+B, 940 ptas./Tm. por compensación de pulpa y transportes, 472 por subvención de la CE y 800 ptas./Tm. de subvención de la Junta de Castilla y León, una

prima que ha sido renovada para esta campaña mediante una Orden autonómica del pasado 4 de enero.

Otras comunidades autónomas, concretamente Extremadura y Castilla-La Mancha, han establecido también subvenciones adicionales para sus cultivadores de remolacha, mientras que en Andalucía son reclamadas insistentemente por los productores desde hace tiempo (y máxime en esta época de sequía) sin encontrar respuesta por parte del Gobierno regional.

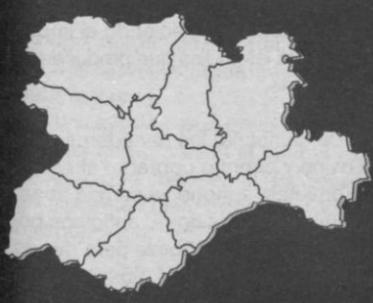
Mejoras técnicas

Por otra parte, antes de que comience la próxima campaña en junio o julio, el Ministerio de Agricultura tendrá que enviar a la Comisión el Plan de reestructuración del sector productor remolachero, con el que se intentará mejorar las técnicas del cultivo y

las estructuras de las exportaciones mediante inversiones.

En el mismo horizonte se espera también la propuesta de la Comunidad Europea para reformar la actual Organización Común de Mercado (OCM) del sector azucarero y ver, ante todo, si se mantiene el reparto de los cupos nacionales y no se cambia por dejarlo al libre albedrío de las empresas, como desearían los franceses. De ello depende la supervivencia del cultivo no sólo en Castilla y León, sino en el resto de España.

Mientras tanto, se impone un compás de espera en el que el productor de remolacha tendrá encima a las empresas azucareras porque éstas han reconocido y demostrado que no tienen su razón de ser si no existe el cultivo por el que tendrán también que luchar a las duras y a las maduras.



CAJAS RURALES

de Castilla y León

¡¡SOMOS ESPECIALISTAS!!

P.A.C.

EN LA TRAMITACION DE LA P.A.C. CUENTE CON NOSOTROS



LA PAC COMIENZA A APLICARSE

Una reordenación a «mala leche»

El sector lácteo se muestra crispado ante el polémico reparto de cuotas de la CE

ALFREDO LOPEZ

El sector lácteo y, más concretamente, la asignación de las cuotas parecía un instrumento de primer orden para proceder a una reordenación del sector lácteo, abandonado durante años hasta situarlo en una posición insostenible, pero está creando una verdadera crispación entre los productores, que consideran las cuotas desajustadas a su producción real. Este malestar tiene su base en el temor de que las cantidades ahora asignadas se conviertan en definitivas en el mes de abril, iniciándose entonces el cobro de la supertasa a quienes superen lo fijado.

La implantación del sistema de cuotas constituía un importante paso en la reordenación y modernización de este sector, al que la política aplicada anteriormente hizo un daño que de no atajarse a tiempo podía hacerse irreparable, sobre todo en las regiones como Castilla y León.

Las expectativas, sin embargo, se están viendo truncadas ya que la opinión generalizada del sector es que el mecanismo elegido para la asignación de cuotas, además de los múltiples errores que pueden tener, no es válido para acometer la reestructuración del sector lácteo y se está limitando a ser un puro reparto lineal de cuotas, al que se acusa de estar hecho al dictado de las industrias lácteas.

La reducción lineal de la producción realizada al asignarse las cuotas lácteas creó crispación en muchas regiones tradicionalmente productoras. En estas, entre las que se encuentran muchas comarcas de Castilla y León, muchos ganaderos, sobre todo jóvenes que llevarán permanecer en el campo, llevaron a cabo importantes inversiones con el objetivo de, ampliando la producción, hacer más rentables y viables sus explotaciones. Estos ganaderos se han encontrado con que su cuota se ve disminuida en la

misma proporción en la que se hace disminuir la de otras explotaciones bien ligadas a las empresas, bien situadas en zonas no tradicionalmente productoras, o bien llevadas por personas que no son ganaderos a título principal.

Descompensación

Pero en Castilla y León se unía un segundo problema. Esta región fue la que más leche dejó de producir en el Plan de Abandono Voluntario llevado a cabo en febrero del pasado año. La aplicación lineal de los coeficientes reductores de producción con la asignación de cuotas trajo consigo que esta aportación a la creación de una reserva con que poder hacer frente a las posteriores asignaciones de cantidades de referencia para producir no fuera compensada regionalmente. La Consejería de Agricultura y la mayoría de las

Un nuevo Plan de Abandono prevé dejar de producir 200.000 toneladas

método de reducir en la misma proporción a todos la cantidad a producir hasta igualar la producción real con la que legalmente nos permite la CE. Esta asignación hubiera debido tener en cuenta una serie de factores que dieran un baremo diferenciado de reducción.

Así, partiendo de la base de primar o penalizar en menor medida a los ganaderos que lo fueran a título principal, se deberían haber tenido en cuenta situaciones geográficas como la ubicación de la explotación en zona desfavorecida —más del 75% de nuestra comunidad autónoma tiene esta calificación—; socioeconómicas como el tamaño de la explotación, de manera que aquellas pequeñas y medianas no hubiesen tenido que reducir, o hacerlo en menor medida, su producción; las de jóvenes ganaderos que hicieron inversiones para situar a su explotación por encima del umbral de viabilidad y que, con la reducción de cantidad para producir, pueden quedar por debajo de ella.

Nuevo plan

Quizá no se haya podido hacer de otra forma, quizá la Comisión no lo permita, pero eso son hechos reales que no se pueden dejar de señalar. Ahora se va a poner en marcha un nuevo plan de abandono voluntario por una cantidad total de 200.000 Tm. Esta cantidad de leche que se rescate, además de usarse para corregir los errores cometidos en las asignaciones individuales, puede ser aprovechado para paliar esas deficiencias de la

anterior asignación de cantidades.

En cualquier caso, se está avanzando en la reordenación y modernización de un sector sobre el que la política anterior hizo un daño que, de no haberse atajado a tiempo, podía haber sido irreparable. En esta valoración coincide todo aquel —aunque se muestre en desacuerdo en cómo se ha desarrollado tal o cual aspecto concreto— que se preocupe por la realidad láctea.

Quedan, sin embargo, todavía muchas cosas pendientes de realizar. Hay que asegurar el control de los dispuestos. El sector lácteo —administraciones central y autonómica, ganaderos, cooperativas e industriales—, no puede permitirse el lujo de caer nuevamente en los mismos o parecidos errores del pasado. Errores que fueron responsabilidad de la Administración, por supuesto, pero también de los ganaderos y de las industrias, ya que mientras que la primera dejó al sector casi a su libre albedrío, los industriales generaron una dinámica, incentivando la producción con elevados precios, a la que los ganaderos lógicamente se prestaron con un aumento a la vez de su cabaña y en su producción. El resultado ha sido llegar a una situación en la que no quedaba más remedio que poner orden ante las amenazas de Bruselas y actuar quirúrgicamente.

Hay que asegurar, después de haber asignado una cuota individual que responde a las necesidades del sector y a las realidades de cada ganadero, el cumplimiento del sistema de cuotas y se deberá hacer de forma enérgica. Para ello es necesaria una labor de concienciación, unida a la actividad administrativa y sancionadora necesaria.

Pero también hay que asegurar que la industria no va a hacer lo que le venga en gana, estableciendo mecanismos que eviten prácticas de oligopolio y creando las bases de unas relaciones interprofesionales perdurables en el tiempo y que deberían servir para consolidar el futuro del sector, la viabilidad de la industria y la mejora de la renta de los ganaderos.



organización e s agrarias protestaron enérgicamente por esto, pero el sistema no cambió.

De todas formas esto quizá no sea lo principal.

Lo más importante para una región en la que, como la castellano-leonesa, predomina la pequeña y mediana explotación, hubiera sido proceder a una asignación de cuota que no se hiciera mediante el sencillo

por las contraprestaciones que, en forma de primas, recibieron los ganaderos.

Las comunidades autónomas tienen de plazo hasta el 31 de marzo para comunicar al SENPA el límite individual para la concesión de primas de la campaña 93 y siguientes e informar del número de animales por los que el productor tendrá derecho a percibir la prima completa y el número de los que la cobrarán reducida, una vez que se de a conocer la relación de ganaderos a los que se les ha concedido derechos de la Reserva Nacional.

En el pasado mes, el Comité de Gestión de Carnes de Ovino y Caprino de la Comunidad Europea aprobó la cuantía definitiva de las primas compensatorias para la campaña

de comercialización de 1992, estableciendo el importe total en 3.091,653 pesetas para las ovejas que producen corderos ligeros y para las cabras.

Con cargo a la pasada campaña, los ganaderos españoles productores de ovino y caprino cobrarán alrededor de 74.000 millones de pesetas, aunque ya se han abonado, en concepto de prima compensatoria, anticipos por un valor de 1.687,162 pesetas por cabeza para ovejas productoras de corderos pesados y de 1.254,241 para cabras y productoras de corderos ligeros.

Según el Ministerio de Agricultura, las cantidades correspondientes al saldo final de estas primas ascienden aproximadamente a 30.000 millones de pesetas,

Oveja que bala...

Castilla y León tiene en la actualidad la mayor cabaña ganadera de ovino de España, y una de las más importantes de caprino. Según fuentes de la Consejería de Agricultura, durante el pasado ejercicio se comercializaron 2.318.593 cabezas de ovino y 82.536 de caprino, lo que supone un fuerte incremento con respecto al año 1991. Aunque el año empezó más bajo en ventas, en los meses de marzo y abril, coincidiendo con la celebración de la Pascua, las ventas crecieron extraordinariamente para bajar al inicio del verano tanto en ovino como en caprino, aunque en estas últimas la caída no fue tan grande.

Este incremento del consumo tiene su explicación en la bajada de los precios de la carne conseguida en parte



LA PAC COMIENZA A APLICARSE

Primas para compensar los bajos precios del vacuno de carne

Los ganaderos pueden percibir hasta 15.000 pesetas por cabeza al año

A. L.

El sector bovino de carne, que ha estado pasando un bache importante de precios desde nuestra adhesión a la Comunidad, podría ver disminuida esa dependencia con la prima compensatoria que se dará a aquellos ganaderos que lo soliciten por mantener bovinos machos en su explotación, ya que se concederá para animales vivos, como máximo dos veces en la vida de cada uno, de acuerdo con una serie de tramos de edad, que van desde los 8 a los 20 meses y los que tengan un mínimo de 21 meses.

Según la Orden reguladora, generarán derecho a prima los bovinos machos que sean mantenidos en la explotación por el productor para su engorde durante un período mínimo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la solicitud, y la prima afectará a un máximo de noventa animales, identificados por marcaje individual auricular o con crotal alternativo, por año de referencia y explotación y para cada una de las franjas de edad contempladas.

Los animales objeto de solicitud de prima deberán estar inscritos en un registro de explotación. El número de bovinos subvencionables con la prima especial estará limitado por la aplicación de un factor de densidad, expresado en número de Unidades de Ganado Mayor (UGM) en relación con la superficie forrajera de la explotación que esté dedicada a la alimentación de los animales mantenidos en ella. Este factor de densidad se fija en 3,5 UGM/ha. para el año 1993, aunque los productores podrán quedar exentos de aplicarlo cuando el número de animales que deba tomarse en consideración para la determinación de dicho factor de densidad, cuyo cálculo se expone en la Orden, no supere las 15 UGM.

Las solicitudes de prima se presentarán durante todo el año 1993



El sector bovino de carne ha pasado un importante bache de precios, aunque a la hora de la compra no lo pareciera.

LORENZO MATIAS

ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que se encuentre ubicada la superficie forrajera de la explotación o su mayor parte y exigirán la presentación del DNI o NIF/CIF del solicitante, la cartilla ganadera o documento oficial similar y un certificado de la entidad bancaria en la que se domicilie el pago de la prima. Cualquier traslado o compra de animales en la explotación con derecho a subvención deberá ser comunicado ante las autoridades de las comunidades autónomas correspondientes, que se encargarán de realizar los respectivos controles administrativos o inspecciones sobre el terreno, que afecten a un mínimo de muestra del 10 por ciento de las solicitudes de prima.

La normativa establece penalizaciones porcentuales y progresivas cuando haya diferencias entre animales solicitados para prima y comprobados, que puede llegar a la no concesión de ninguna ayuda. Aunque se mantendrán las subven-

Las solicitudes para recibir la prima pueden cursarse durante todo el año 1993

ciones si el productor no puede cumplir el compromiso de retención del rebaño por causas de fuerza mayor o por circunstancias naturales de vida, siempre que se aporten pruebas.

Por otra parte, si se comprueba una diferencia entre la superficie forrajera declarada y la verificada en control que supere en un 20%, el productor quedará excluido del beneficio especial.

El importe unitario de la prima para 1993 se fija en 9.965 pesetas por animal subvencionable. Además si los productores tienen un

factor de densidad inferior a 1,4 UGM/ha. se podrán beneficiar de un importe complementario de 4.982 pesetas por animal reconocido con derecho a prima, del que podrían beneficiarse también aquellos productores que cumplan lo anterior y posean un número de animales que no supera las 15 UGM, siempre que hayan presentado la declaración de superficie forrajera de acuerdo a la O.M. de 11 de febrero de 1993. Se prevé un anticipo de 5.979 pesetas por bovino con derecho a prima.

Entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, las comunidades autónomas tendrán que enviar al SENPA los datos de los beneficiarios de este anticipo, que se repetirá a efectos del pago definitivo de la prima con los datos finales de todos los productores acogidos. Si se supera el límite nacional de animales con prima, se producirá un porcentaje de reducción en el número de bovinos con derecho a prima por productor y año.

Hasta el 31 de marzo de este año será factible la presentación de solicitudes para animales sacrificados de 8 a 20 meses de edad a efectos de límite de noventa animales, junto con el certificado del matadero, siempre que dicho sacrificio se haya producido después del 1 de enero de este año y para animales vivos, con un período de dos meses de retención para ambas modalidades de prima.

Tendrá que pasar al menos una campaña para conocer a fondo si estas primas sirven para asegurar el futuro de este sector y de las rentas de los ganaderos de Castilla y León, sobre todo en lo que se refiere a las razas autóctonas de la región (avileña, 7,9% del censo vacuno total; y morucha, 14%), que se caracterizan por su aptitud cármica de calidad reconocida, y si podrán supervivir más las explotaciones intensivas de cebo, que las extensivas, o si las dificultades al respecto seguirán igual de patentes para ambas.

prima que pierde

cuyo pago comenzará a realizarse cuando el SENPA cuente con las solicitudes tramitadas por las comunidades autónomas.

A estas ayudas por producción hay que añadir las concedidas como primas al mundo rural para zonas desfavorecidas, que suponen un incremento entre 204,622 y 322,871 pesetas más, dependiendo del tipo de ganado y de su producción.

A principios de año, Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) denunció que el propio Ministerio intentaba obstaculizar las ayudas, al no ampliar el plazo de solicitud de cuotas. Pero después de que la Orden Ministerial fuera, aunque con retraso, publicada en el BOE y ampliado el

plazo para solicitar el cobro de primas compensatorias para esta campaña, las voces críticas se apagaron.

Por su parte, la Junta de Castilla y León aprobó un presupuesto superior a los 3.000 millones de pesetas para sanear la cabaña ganadera, cuyos resultados fueron calificados por el consejero de Agricultura como muy positivos. Esta opinión no era compartida por representantes del grupo socialista en las Cortes regionales, que aseguraron que la Consejería de Agricultura no exponía correctamente los datos estadísticos, asegurando, entre otras cosas, que muchos rebaños de ovejas saneados de enfermedades como la brucelosis, sufrían posteriormente las consecuencias de esta enfermedad con malos partos y abortos. Opinión compartida por alguna organización

agraria que, como la UPA, pide el sacrificio de las reses para asegurar el saneamiento.

El consejero de Agricultura de la comunidad castellano-leonesa, Isaias García Monge, aseguró que el MAPA había reducido en un 40% las ayudas ofrecidas en un principio como transferencia para indemnizaciones, cuyo montante final fue de 996 millones, según la Consejería.

Pese a los inconvenientes a los que se enfrenta el sector ganadero, el ovino y el caprino pueden ser una solución óptima para los habitantes de una región con tradición ganadera que ahora, con la presentación de la candidatura del cordero de Aranda a denominación de origen, apuesta por ofrecer calidad.



LAS PROVECHOSAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO

Mil agricultores podrán jubilarse anticipadamente cada año

El 40% de los agricultores castellano-leoneses tiene más de 55 años

Mabel G. Bustelo

El próximo Consejo de Ministros aprobará, casi con toda seguridad, el Real Decreto que establece un sistema de ayudas para fomentar el cese anticipado en la actividad agraria, la «jubilación anticipada». Una normativa que, aunque sin acuerdo en algunos puntos, ha sido negociado entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias y supone la plasmación del Reglamento comunitario 2079/92. Unos mil agricultores podrán acogerse anualmente a este régimen en Castilla y León.

Los objetivos del decreto son básicamente el rejuvenecimiento de la población activa agraria, proporcionando «una renta adecuada» al titular que cesa anticipadamente, y el redimensionamiento de las explotaciones agrarias para hacerlas más competitivas. Precisamente con este objetivo, en la normativa se establecerá una dimensión económica mínima para que un titular pueda acogerse a este régimen, uno de los puntos que ha suscitado mayores discrepancias.

Agricultura pretende, salvo cambios o ajustes de última hora, jubilar anticipadamente alrededor de 20.000 agricultores en el quinquenio 1993/97, para lo que movilizará un importe de 112.450 millones de pesetas. De estas cantidades, en torno a un 20% corresponden a Castilla y León, según los índices que se han manejado y que responden a las necesidades de reestructuración, lo que supone en torno a 1.000 agricultores anualmente y una aportación superior a los 4.000 millones de pesetas. Esta es la región a la que se atribuye un mayor número de posibles beneficiarios de este régimen, seguida de Galicia y Andalucía.

Ayudas

Las ayudas que percibirán quienes se acojan a este régimen consistirán en una indemnización anual (incluyendo las cuotas de la Seguridad Social) de 750.000 pesetas si el titular tiene cónyuge a su cargo y éste no recibe la ayuda por ser trabajador; 650.000 si no tiene cónyuge a cargo y 550.000 si el cónyuge recibe dicha ayuda. Además se recibirá una prima anual de 8.000 pesetas por hectárea que se transmita de explotación hasta llegar a 300.000 pesetas por explotación.

Estos importes se reciben hasta la edad habitual de jubilación, a los 65 años, y a partir de aquí y hasta los 70 se percibe un complemento anual equivalente a la diferencia entre el importe anual anterior y la cuantía de la jubilación en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

Para cesar en la actividad, los beneficiarios deben haber cumplido 60 años, sin llegar a los 65, haber ejercido la actividad a título principal al menos durante los diez años anteriores al cese y comprometerse a cesar definitivamente en la actividad agraria.

Por su parte, quienes deseen acceder a ella deben ser titulares, al menos desde un año antes, de una explotación, no haber cumplido los 45 años y estar de alta en cualquier régimen especial agrario de la Seguridad Social, así como comprometerse a mantener la explotación resultante de esta transmisión durante un plazo no inferior a diez años, ejerciendo la actividad agraria a título principal. En la transmisión se incluyen no sólo los elementos físicos de la explotación, sino también sus cuotas, derechos, cantidades de referencia, etc..., y se realiza bien en propiedad o en arrendamiento (en escritura pública o contrato privado).

Discrepancias

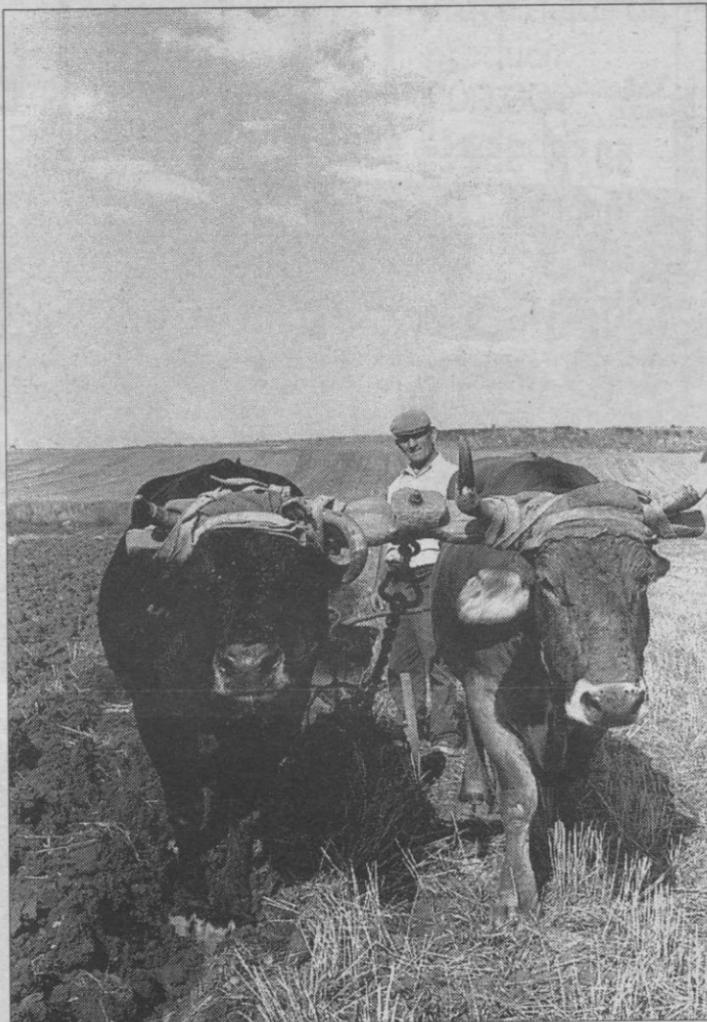
El principal motivo de discrepancia entre Agricultura y las organizaciones profesionales agrarias a la hora de definir la redacción final de esta normativa ha sido, y lo será todavía probablemente después de que haya sido aprobada, la dimensión mínima exigida para que una explotación se acoja al sistema. Todo parece indicar que se establecerá en 6 UDEs (Unidades de Dimensión Económica, una medida estándar que se obtiene dividiendo por 1.200 el margen bruto de cada explotación), lo que supone según los cálculos del sector una renta anual superior a un millón de pesetas.

Las ayudas a la jubilación anticipada son incompatibles con cualquier otra subvención pública vinculada a la actividad agraria, concretamente con el régimen de forestación y con el carácter de pensionista por parte del beneficiario.

Asimismo, los titulares de explotación que se hayan acogido al programa de abandono de la producción lechera no pueden acogerse a las ayudas de jubilación, ni los que hayan percibido ayudas por abandono definitivo de plantaciones de viñedo (a menos que el abandono no haya superado el 20% de la superficie de explotación), o primas por retirada de tierras (sólo si la superficie retirada no supera el 25% de la explotación).

Castilla y León es la Comunidad Autónoma que tiene mayores posibilidades de acceder a este régimen, lo que puede interpretarse como una mayor necesidad de reestructuración, tanto del tamaño de sus explotaciones como de rejuvenecimiento de su población agraria.

Sus características son marca-



Más del 25% de la población activa de Castilla y León se dedica a la agricultura.

El MAPA pretende jubilar a 26.000 agricultores en el quinquenio 93/97 pagando 112.450 millones

damente agrarias: según datos de la Junta, más del 60% de su superficie se considera Superficie Agrícola Útil, y más del 25% de la población activa de la región se dedica a la agricultura, más del doble del porcentaje nacional. El Valor Añadido Bruto correspondiente a la agricultura es el 11% del total, mientras a nivel nacional está en torno al 5,3%.

La necesidad de aplicar el régimen de jubilación anticipada se muestra en un dato: en este momento, casi el 40% de los titulares de explotación de Castilla y León son mayores de 55 años. Según los datos de la Encuesta de Población Activa, correspondientes al 31 de diciembre de 1992, de los 135.700 ocupados en la agricultura que existían en esta autonomía en esa fecha, casi 50.000 eran mayores de 55 años.

Otro hándicap es el pequeño tamaño de las explotaciones que,

en general, tienen dimensiones insuficientes para asegurar una productividad adecuada. Un problema a cuya solución puede contribuir este régimen, aunque sólo como medida inicial, pero que según fuentes del sector, también irá solucionándose «por ley natural, debido al elevado nivel de envejecimiento de la población».

Reticencias

Las organizaciones agrarias han mostrado ciertas reticencias ante la eficacia real que tendrá la aplicación de este régimen. ASAJA considera insuficiente la dotación presupuestaria, queja que es compartida también desde COAG y UPA, aunque en estos casos con una valoración añadida: con la actual redacción, asegura UPA, quedarían sin posibilidad de jubilarse anticipadamente «el 46% de los agricultores y ganaderos en áreas, por ejemplo, de la cornisa cantábrica».

Esta organización agraria rechaza la adopción de un límite mínimo de UDEs para poder acogerse al programa y considera que aunque la pequeña dimensión de muchas explotaciones no las hace viables para el mejor dimensionamiento de otras, las parcelas rescatadas por un programa generoso de jubilación anticipada podrían ir a parar a un banco de tierras.

La avutarda, embajadora de la Junta

Los agricultores de la Tierra de Campos y de la Tierra de Campiñas de Castilla y León pueden ver confirmada este mismo mes de marzo una subvención de 30.000 millones de pesetas concedida por la CE en el marco de las medidas de protección medioambiental incluidas en la PAC. A cambio, deben comprometerse a mantener prácticas agrícolas que benefician a las avutardas y a otras aves esteparias.

El programa, según las previsiones, debe ser aprobado en la reunión del Comité «Star» de la CE de marzo, con lo que Castilla y León se convertiría en la segunda autonomía española en acceder a esta vía de ayudas complementarias previstas en la PAC. Las subvenciones serán cofinanciadas al 75% por la CE y el resto saldrá de las arcas del Gobierno regional.

Previamente, la Comunidad Autónoma ha elaborado un «Programa de Zona» (anteriormente denominado de «áreas sensibles») donde se especifican las prácticas agrícolas extensivas exigidas que benefician el ecosistema de las avutardas.

El «Programa de Zona» será de aplicación en las dos grandes zonas de la Comunidad Autónoma que constituyen el hábitat de las aves esteparias amenazadas como el sisón, ortega, aguilucho cenizo, calandria, cernícalo primitivo y, especialmente, los 7.500 ejemplares de avutarda censados, que suponen el 26% de la población mundial de esta especie.

Las dos zonas son la Tierra de Campos, que se extiende por 813.323 hectáreas de León, Palencia, Valladolid, Zamora y Burgos; y los 817.057 hectáreas de la Tierra de Campiñas, en las provincias de Zamora, Avila, Salamanca, Valladolid y Segovia.

El proyecto de la Consejería de Medio Ambiente prevé tres niveles de compromiso y distintas modalidades de primas en función de dos baremos objetivos, la densidad de avutardas de la zona y el tamaño de la explotación.

En líneas generales, los agricultores deben reducir la utilización de fertilizantes químicos, incrementar la extensificación del cultivo, sembrar una parte de leguminosas o alfalfa y mejorar los pastos y rastrojeras. Además, se exige retrasar en algunos días la cosecha.



Los fondos destinados a reforestación en Castilla y León superan los 25.000 millones de pesetas.

Reforesta, que algo quedará

CE, MAPA y Junta preparan un ambicioso plan para reforestar 90.000 hectáreas durante 40 años

Maribel González

Casi noventa mil hectáreas de tierra podrán beneficiarse en Castilla y León de la nueva normativa de reforestación que ha aprobado recientemente el Consejo de Ministros. El Real Decreto de ayudas para fomentar las inversiones forestales en explotaciones agrarias, plasmación de una de las medidas de acompañamiento previstas en la reforma de la Política Agraria Común, prevé ayudas máximas de hasta 440.000 pesetas por hectárea dependiendo de la comarca y especies de que se trate. En total, los fondos que recibirá esta Comunidad Autónoma superarán los 25.000 millones de pesetas en los próximos cinco años y serán más de 50.000 millones hasta el año 2017.

El Real Decreto contiene en realidad dos programas diferenciados: por un lado, ayudas para las inversiones forestales en las explotaciones agrarias, y por otro ayudas para inversiones en las explotaciones forestales.

El período de aplicación es el quinquenio 1993/97 y el objetivo es repoblar una media de 120.000 hectáreas al año en todo el Estado (600.000 en total), de las cuales 400.000 lo serán en tierras agrarias y las restantes 200.000 serán superficie forestal. Por otra parte, también se pretende realizar acciones de mejora en un total de 650.000 hectáreas ya forestadas.

Las ayudas para forestación de tierras agrarias comprenden una cuantía por repoblación que oscila entre 175.000 y 440.000 pesetas

por hectárea de tierra repoblada (en función de la especie arbórea empleada, primándose las especies autóctonas y de valor ecológico superior, y el interés del paraje para crear un ecosistema forestal).

A ello hay que añadir una ayuda de mantenimiento de 36.000 pesetas anuales por hectárea durante los primeros cinco años, y una cuantía añadida en concepto de compensación de renta, que se pagará durante los primeros 20 años y será de hasta 35.000 pesetas anuales por hectárea (para agricultores a título principal) y de un máximo de 21.000 para los restantes.

Por otra parte, está previsto en este apartado un programa específico de mejora y regeneración de alcornocales, con unas ayudas que con las aportaciones de las comu-

La Administración prevé ayudas máximas de hasta 440.000 pesetas por hectárea

nidades autónomas pueden elevarse a las 300.000 pesetas/Ha., según el Ministerio de Agricultura.

Ayudas

En cuanto a las ayudas en explotaciones forestales, se dirigen a nuevas plantaciones y repoblaciones de terrenos forestales, fomento de agrupaciones de

empresarios forestales, infraestructuras de prevención de incendios, medidas de divulgación y sensibilización forestal, etc... En este caso las ayudas serán un porcentaje de la inversión realizada que puede alcanzar hasta el 65% del total, pero que se gradúa en función de las especies de repoblación, tipo de inversión y zona de actuación.

Según estas medidas, un agricultor a título principal puede recibir en veinte años, si dispone de veinte hectáreas, hasta un máximo de algo más de veinte millones de pesetas. De estos, unos siete millones corresponderían a ayudas directas para la reforestación; unos tres y medio de prima de mantenimiento durante cinco años y otros catorce, durante veinte años, como mantenimiento de rentas. Estas

cantidades serían sensiblemente superiores si la explotación estuviese situada en una zona especialmente protegida, como un Parque Nacional. Sin embargo, estas ayudas se interrumpirían si la superficie reforestada se perdiera, ya sea por causas naturales o por negligencia del agricultor.

El coste total previsto para este programa es de 156.350 millones de pesetas en el período 1993/97, de los que 92.400 corresponden al FEOGA-Garantía y otros 17.000 se aportarán entre el Fondo de Cohesión (10.000 millones, una partida recientemente aprobada) y el FEOGA-Orientación. El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas aportarán la cantidad restante, un total de 46.950 millones de pesetas. Según los cálculos efectuados por el MAPA, el coste total del programa hasta el final de su aplicación (el año 2017, fecha en que termina el pago de la compensación de renta), será de 316.350 millones de pesetas.

El cálculo supone que a Castilla y León le corresponde algo más del 17 por ciento del total. Es decir, una superficie de 88.360 hectáreas y unos fondos que superan ligeramente los 25.000 millones de pesetas (25.036) en los próximos cinco años, lo que la sitúa en el segundo lugar del total nacional sólo por detrás de Andalucía. Hasta el año 2017, fecha de finalización del programa, esta Comunidad recibirá 52.460 millones de pesetas. Estructuras Agrarias, una generación de empleo de más de dos millones de jornales para la región.

En total, en España existen en estos momentos 22,7 millones de hectáreas de superficie forestal, según los datos del informe final de la Ponencia de Incendios Forestales del Senado, que ha sido recientemente aprobado por esta Cámara y que analiza en profundidad tanto la estructura del sector forestal como la problemática de los incendios en nuestro país.

Castilla y León tiene una superficie forestal de 3.635.965 hectáreas, de las cuales 1,9 millones corresponden a superficie arbolada y 1,6 a superficie no arbolada (que incluye áreas con vegetación arbustiva clara, matorral, etc...). Del poco más de un millón de hectáreas que en esta comunidad tienen lo que los expertos califican como «buena cobertura arbórea», la práctica totalidad, unas 850.000, corresponden a coníferas, mientras el resto lo ocupan las frondosas.

Una nueva estrategia forestal

El Plan de Reforestación constituye sólo una parte de una estrategia forestal que la Secretaría General de Estructuras Agrarias está estudiando para el horizonte del año 2032 que supondrá un coste cercano a los cuatro billones de pesetas, de los que Agricultura espera que unos dos tercios provengan de fondos comunitarios.

Según Luis Atienza, secretario general de Estructuras Agrarias del MAPA, en España existe un alto número de hectáreas susceptibles de convertirse en un futuro en superficie arbolada, extensión que corresponde tanto a la que actualmente está considerada como arbolada, como a la que en la actualidad tiene usos agrícolas, pero que, con las medidas de reforestación recientemente aprobadas, pueden transformarse en masas forestales.

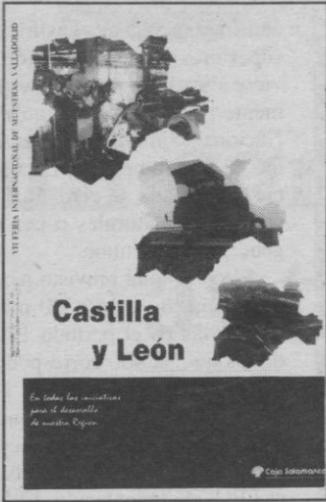
El objetivo sería lograr un nuevo mapa de utilización del suelo en el que el 40% de la superficie sea considerada bosque en el año 2032. Esto supondría lograr un ritmo anual de repoblaciones del orden de las 200.000 hectáreas —el doble del máximo alcanzado en los últimos cincuenta años—, con un coste anual de 100.000 millones de pesetas, para lo que el Ministerio de Agricultura espera contar con cofinanciación comunitaria en un porcentaje de más del 60% en su conjunto.

Esta cofinanciación provendría tanto del FEOGA-Garantía —programa de reforestación de tierras agrícolas y mantenimiento de rentas—, como de los Fondos de Cohesión y FEOGA-Orientación (estructuras) para los gastos de conservación de la cubierta vegetal.

Con este plan, la Secretaría General de Estructuras pretende, además del objetivo anteriormente mencionado de cambiar el mapa de la superficie arbolada de España, con efectos en el freno de la erosión, el mantenimiento de la riqueza ecológica y la regulación hídrica; contribuir al desarrollo rural por lo que supone de fomento del empleo y de sostenimiento de rentas en el campo; contribuir a la lucha contra los incendios forestales, además de aumentar nuestra producción maderera, fuertemente dependiente del exterior.

Según Luis Atienza, éste no es un plan diseñado en el aire, sino que parte de la base de una realidad de gastos ya comprometidos que son, principalmente, los acordados para la puesta en práctica de las medidas de reforestación aprobadas por el Consejo de Ministros.

SUPLEMENTOS MONOGRÁFICOS ICAL

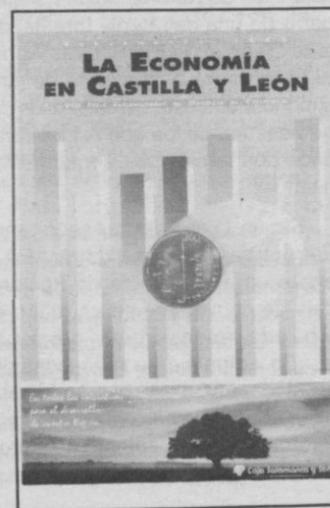


El periódico de mayor tirada de Castilla y León, comprado por 100.000 personas cada vez que llega a los kioscos. La única información en la Comunidad Autónoma que leen 500.000 lectores, avalada por los rotativos más importantes de Castilla y León.

Son los SUPLEMENTOS MONOGRAFICOS ICAL, los de más impacto de la prensa regional. El mejor cauce para que su publicidad llegue a todos los rincones de la Comunidad más extensa de Europa. Con la fuerza de periódicos centenarios y la solidez de la agencia de noticias más importante de la región.

Si su trabajo consiste en fabricar los mejores productos, ICAL le ofrece la mejor relación calidad/precio para su publicidad.

ICAL: AGENCIA DE NOTICIAS de Castilla y León / Santiago 23, 2º izqda / 47001 - VALLADOLID / PUBLICIDAD: 983 33 43 33



La última «patata caliente» del campo

La siembra de patata de consumo se reducirá en la región un 20 por ciento

I. Pagazaurtundua

En junio de 1992 se produjo el arranque a destiempo de la patata extratemprana andaluza por culpa de las lluvias, lo que provocó que esa producción ralentizara la salida de la temprana castellano-leonesa y de la zona centro, que no quería oír hablar de unos precios por los suelos, y nunca más a mano el tópico. A esto hay que sumar el hecho negativo de la entrada, al parecer subvencionada por sus Gobiernos en un claro *dumping*, de patata vieja francesa, holandesa y belga, mejor presentada que la española.

Con un precio entonces de siete pesetas por kilo (en campaña normal supera las 25), los técnicos calcularon unas pérdidas de 12.000 millones entre los cultivadores de Castilla y León, con una media de 300.000 pesetas por hectárea sobre un coste medio de 550.000 pesetas/hectárea.

Datos de las OPAS indican que en junio de 1992 entraron en España 11.000 toneladas de patatas de consumo (173.000 entre enero y abril de ese año), mientras que las exportaciones pasaron de 83.817 toneladas en 1991 a 59.000 en el 92. El hundimiento del mercado fue entonces evidente, y de ahí las protestas de las organizaciones agrarias, que veían como uno de los productos de más peso en la región (36.000 hectáreas sembradas en 1991 por 70.000 en 1984) se venía a pique y sólo se sostenía por los buenos precios pagados en campañas anteriores.

Las exigencias de los cultivadores eran en principio la retirada de 100.000 toneladas del mercado para consumo animal o feculera, así como la aplicación de la cláusula de salvaguardia en las fronteras españolas, mientras que la Administración sugirió en principio el retraso en el arranque y después la concesión de créditos de campaña a corto plazo para almacenamiento; la última solución fue el pago de una peseta por kilo y mes durante tres meses para un máximo nacional de 100.000 toneladas de patata de consumo (300 millones).

Fuentes de COAG han asegurado a ICAL que en esta región hubo un rechazo administrativo del 30 por ciento de las solicitudes presentadas para ese almacenamiento, concretamente en Burgos, León, Avila y Salamanca, mientras que se aceptaron todas las de Valladolid. La operación especial del MAPA concluyó con 30.501 toneladas almacenadas en la región desde el mes de noviembre, con la siguiente distribución: en Avila fueron 1.910; en Burgos, 5.080; en León, 1.880; en Palencia, 2.040; en Salamanca, 3.005; en Valladolid, 10.130; y en Zamora, 6.456.



El «barbechazo» ha perjudicado claramente a la región.

S. BERMEJO

En algunos casos se adelantó el pago por el mal estado de conservación del tubérculo.

Patata de siembra

En cuanto a la patata de siembra, de la que dependen unas novecientas familias de la región (sobre todo en Burgos y Palencia), ya en agosto del año pasado se decía que la crisis de precios provocaría un descenso en la deman-

da de semilla para la siguiente campaña, así como un considerable aumento de la morosidad.

ICAL ha podido saber que el precio de la patata de siembra ha caído desde las 80 pesetas/kilo hasta las 50. Se prevé también un descenso de la superficie de siembra (3.624 hectáreas en el 92, para una producción de 49.900 toneladas certificadas). En La Rioja se está pagando la patata certificada a

15 pesetas, aunque con los recargos de los almacenistas llega al agricultor a 30 ó 35 pesetas. Los cultivadores se encuentran por tanto con la dificultad añadida de comprar semilla, que en algunos casos se entrega sin cobrarla por la evidente falta de liquidez del sector.

La grave crisis que atraviesan tanto los productores de patata de siembra como de consumo puede beneficiar, según los expertos, al

El precio de la patata de siembra ha caído de las 80 a las 50 pesetas por kilo

cultivo de remolacha, aunque la necesidad de agua también coarta a muchos a la hora de decidirse.

Toneladas tiradas

El caso es que muchas toneladas almacenadas el año pasado se han tirado o se van a tirar, pues el precio de 2-3 pesetas/kilo de la actualidad no compensa, a pesar de las tres pesetas cobradas de la Administración.

Este año se ha de sumar el problema de la no nascencia por falta de agua en el sur, que provocará un nuevo retraso en el arranque y otra vez la coincidencia en el mercado con nuestra patata. COAG calcula que en 1992 hubo un 20% más de siembra que en 1991, y que será esa cantidad la que aproximadamente se reduzca esta campaña. Las importaciones van a continuar, aunque en menor número porque el mercado español ya no es tan atractivo como otros años. Lo cierto es que la patata, con peso relativo en los índices de inflación, no volverá nunca a alcanzar la cotización de 1991, cuando llegaron a pagarse hasta 30 pesetas por kilo.

El barbecho blanco, una negra perspectiva

Los agricultores recibieron un jarro de agua fría cuando el pasado 4 de enero salió publicada en el BOE la Orden del barbecho blanco en la que se obliga a dejar sin cultivar 750.000 hectáreas en Castilla y León sin una compensación económica. Esta región ha sido una de las comunidades más perjudicadas, que incluso con la rebaja de un 10% concedida en la resolución del pasado 21 de enero, aún supone medio millón de hectáreas aproximadamente de barbecho obligatorio. Los efectos han sido doblemente dañinos para el agricultor, ya que por un lado la mayoría habían organizado sus cultivos con arreglo a las ayudas comunitarias que pueden percibir, y por otro los porcentajes comarcales manejados no se adecúan a la realidad de estos últimos años.

La obligatoriedad del barbecho blanco no ha venido sólo, sino que ha sido consecuencia de un proceso iniciado con el Plan de Regionalización de los Cultivos Herbáceos (cereales, oleaginosas y proteaginosas) elaborado para delimitar las hectáreas comarcales con derecho a subvenciones contempladas en la PAC. Este plan limita un máximo de 2.453.000 hectáreas que pueden recibir las compensaciones económicas de la CE, de las 4.075.758 hectáreas de superficie de tierra de cultivos existentes en el territorio de Castilla y León.

El resto de tierras, aproximadamente un

millón y medio de hectáreas, se iban a dedicar al resto de los cultivos, tanto de secano como de regadío, hasta la publicación de la Orden del 4 de enero en el BOE, en la que se impuso la obligatoriedad de mantener alrededor de 750.000 hectáreas en barbecho blanco de ese restante, al margen del 15% de abandono de tierras para los que se acojan a las ayudas de la CE.

La Orden ministerial tenía un objetivo claro: paralizar el «boom de siembra» de los cultivos con derecho a compensación económica que establecía la Política Agrícola Comunitaria (PAC), que temía iban a sobrepasar los límites impuestos. El mayor temor provenía de la aplicación de sanciones que contempla por cada hectárea sobrepasada. La repercusión penalizadora no es tan temida como la factura que el año que viene se pasará por estos excesos, ya que la CE obligará a abandonar los porcentajes que ahora se pasan sin subvenciones, independientemente del 15% que la PAC impone a los agricultores este año.

Las voces se alzaron ante la implantación del «barbechazo», ya que la mayoría de los agricultores habían sembrado en sus tierras los cultivos con derecho a ayudas como contrapartida ante el descenso de precios agrícolas, sin que pudieran imaginarse el latigazo que les vendría después. Las organizaciones agrarias ya habían criticado anteriormente el Plan de Regionaliza-

ción en Castilla y León, considerando que era muy limitado, y más este año, en el que los agricultores iban a percibir subvenciones por sembrar determinados cultivos y preveían que el barbecho tradicional iba a ser menor que el de años anteriores. Y en verdad que estos límites se pasarán y se pagarán pronto, dado que el agricultor trabaja de acuerdo con lo que le da de comer y eso, a estas alturas, son las ayudas procedentes de la PAC.

La Consejería de Agricultura dio el primer paso anunciando que iba a recurrir la Orden, pero ello no quita para que las pérdidas que sufrirán los agricultores de Castilla y León se cifren en 10.200 millones de pesetas. La respuesta del Ministerio de Agricultura a la multitud de quejas ha venido de una resolución del 21 de enero de 1993, donde se dictan las normas de cumplimiento del «barbechazo», que rebaja en 10 puntos los índices comarcales publicados en la Orden, estabilizándose en casi medio millón de hectáreas, a la vez que da la posibilidad de justificar a los agricultores que no realicen este abandono; otra cosa será si se acepta o no.

Este descuento no suaviza el problema ya grave porque las estadísticas barajadas para la elaboración de los índices se consideran poco fiables y no se adecúan con el barbecho tradicional en la región, que últimamente era cada vez menor.

Agencia ICAL

Agencia de Noticias de
Castilla y León
Santiago 23, 2º Izq.
47001 - Valladolid
☎ (983) 33 43 33 - 33 43 88
Fax: (983) 34 27 51

Director General

Saturnino Lorenzo García
Gerencia
Roberto Tascón Vicente

Director

José Luis Guerrero Elvira

Redactora-Jefe

María Romero Mayor

Redacción

Víctor Iriarte, Carmelo de Lucas, Teresa Velilla, Ignacio Pagazaurtundua, Francisco Barrasa, Antonio Corbillón, Fernando Alda (Avila), Montserrat Gómez y Gustavo Basurto (Burgos), María Jesús Muñiz y Ana Gaitero (León), Jorge Cancho (Palencia), Nunchi Prieto (Salamanca), Marcelo Garrido y Jesús Martínez Calle (Segovia), Jesús Javier Veramendi (Soria), Alexander Echeguibel y María Hernández (Zamora), Ignacio Miranda (Madrid)

Documentación

Tomás Hoyas

Administración

María José Albillos
Inmaculada Albillos
Isabel Domenech
Eva Bernal

Publicidad

Departamento de ICAL

Fotografías

Archivo de los diarios asociados.

Portada

VB/Cuadrado

**Maquetación/
Infografía/Filmación**

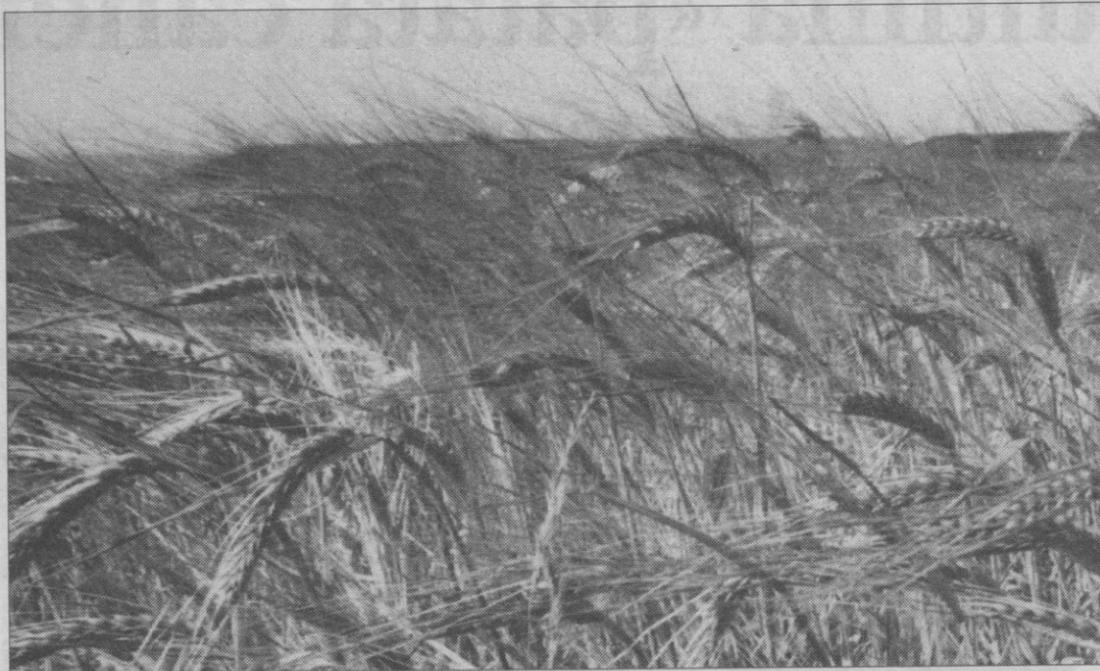
VB Imagen y Comunicación
☎ (947) 20 21 76

Fotomecánica

Punto y Trama

Edita

ICAL, Diarios Castellano-Leoneses Asociados, S.A.
El Diario de Avila
Diario de Burgos
Diario de León
El Diario Palentino
La Gaceta Regional de Salamanca
El Adelantado de Segovia
Diario de Soria



El Ministerio, dispuesto a vender una moto

MIGUEL BLANCO SUAÑA

Responsable Organización COAG, Cyl

Todavía queda algo en el recuerdo de aquel ministro de Agricultura, prodigio de casi una década, hoy aún diputado en el Congreso, que rayó el virtuosismo en tres facetas. Dos de ellas: una, sesgar la realidad del sector agrario a los ojos de la opinión pública; y otra, reparar la misma moto siempre, para vender siempre la misma a los agricultores. En sus últimos días ya casi nadie le creía ni le compraba, salvo apenas algún que otro dirigente agrario de los que hoy también saben instalarse en el ruido sin nueces.

Y nos viene al recuerdo, Maroto, porque actualmente, después de algún tiempo pasado, en el Ministerio se sigue afanosamente repintando y ofreciendo al personal la misma moto.

Bien es verdad que hoy se guardan unas formas estratégicas nuevas. La evidencia sobre la crisis del campo es cada vez más llamativa y no se puede encubrir. Hoy se reconoce desde el MAPA tanto de palabra, obra y omisión cuestiones tan evidentes como que las rentas y las estructuras agrarias siguen estando alejadas de la media comunitaria. Que el envejecimiento del sector es abrumador. Que se está produciendo una gran reducción de población activa, sin que se incorporen suficientes jóvenes. Que el fuerte endeudamiento está hipotecando el presente y futuro de los campesinos de la explotación familiar, etc.

Ocurre que es difícil negar que en 1992 los precios agrarios han descendido un 10,5% y las rentas un 7,8%, situándose casi en una tercera parte de la renta media de otros sectores productivos. Es también patente el grado de endeudamiento que alcanza un volumen superior a la mitad de la renta agraria total, cifrada en casi dos billones de pesetas.

Hoy parece no sorprender que, aún en la actualidad, la base territorial media por explotación de superficie agrícola útil se sitúa en 13 hectáreas y que más de un millón de explotaciones no alcanzan, ni siquiera, dos

unidades de dimensión económica.

En estas condiciones no es extraño que la población activa en el sector pase del 16% en 1986 (incorporación a la CEE) al 9% en la actualidad (apenas medio millón de agricultores quedamos cotizando a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia) y que en torno a la mitad de los agricultores y ganaderos hayan cumplido ya los 55 años, con las evidentes consecuencias perniciosas para un adecuado equilibrio y desarrollo del campo y del medio rural.

El problema, como si estos fueran pocos, está en las alternativas que se barajan y se reparten desde el Gobierno que nos gobierna.

Hoy, después de años de constatación de la crisis: después del agravamiento del proceso de reconversión como consecuencia de la reforma de la PAC, en el marco de los acuerdos del GATT; después de comprobar que nuestra crisis salpica a otros sectores dependientes; después de que el sector se ha echado repetidamente a la calle para exigir no un Estado paternalista, sino un Estado de derecho; después de esto, la alternativa sigue siendo la política de paños calientes y la mota repintada que se vende.

Paños calientes

El Gobierno ha aprobado la supresión de las Jornadas Teóricas, referente reivindicativo de COAG desde el 77, pero no se ha explicado que la cotización a la Seguridad Social de los agricultores por cuenta propia se pretenda que pase de 11.281 pesetas al mes en 1992 a 14.092 en 1993. No parece que se tenga muy en cuenta el IPC.

Se ha reducido el precio de algunos *inputs*, pero no se aclara que se debe a exigencias comunitarias sobre el tipo de IVA y que en el caso del gasoil B, el impuesto sobre hidrocarburos se mantiene por encima del que soportan la mayoría de los agricultores comunitarios.

Ahora se vende como un éxito la concesión a nuestro país de 500.000 toneladas adicionales de cuota de leche, pero no se menciona que con la incorporación a la CE se nos conce-

dió una cuota de producción inferior al nivel de consumo de 1.500.000 toneladas y que durante 1992 en España se han abandonado 687.000 toneladas de cuota de leche.

Además, en este momento se expone al público la joya de la corona del Ministerio de Agricultura, el programa de ayudas al fomento forestal. Es un programa ciertamente positivo para la sociedad y como tal hay que celebrarlo, interesante también para los titulares de explotaciones que son además titulares de otras muchas cosas, pero al pequeño agricultor de la explotación familiar no le quita el hi-po este programa. Nuestras rentas no van a mejorar sustancialmente.

Tampoco se puede considerar que la forestación de 100.000 hectáreas de cultivo en Castilla y León vaya a suponer una alternativa real de cultivo. Significa menos que una séptima parte del barbecho blanco y obligatorio que nos obligan a dejar en blanco.

Pero al MAPA le quedan en la recámara el R.D. de Cese Anticipado y la futura Ley de Bases sobre Modernización de Estructuras. Cese con reestructuración, claro, que es lo que hace falta. Pero difícilmente con un plan para 25.000 agricultores teóricos, sobre cerca de 200.000 que en esta década tendrían que acogerse.

Esperamos también que detrás de la definición actualizada de Explotación y Agricultor prioritarios de la Ley de Modernización, haya otra intención que no sea la de saber quién tiene preferencia para ser colocado en una vitrina, después de ser dise-cado.

Aún está pendiente la consolidación de un marco estable para la negociación de la política agraria de este país, con base en un reconocimiento claro del papel de la OPAS, que deberán legitimarse en un proceso democrático de elecciones sindicales.

Es imprescindible que el Gobierno haga un esfuerzo político y presupuestario a la altura del problema agrario, uno de los problemas de Estado más acuciantes en la actualidad.

Deseamos fervientemente no tener que seguir recordando por más tiempo a Maroto.

Castilla y León también existe

JOSE E. AGUIRRE GUTIERREZ

Presidente de ASAJA en C y L

A los, de por sí, catastróficos efectos que produce la sequía en el sector agrario de Castilla y León hay que añadir los estragos que provoca la gestión del Gobierno central mediante su política de discriminación, que ni el propio ministro para las Administraciones Públicas ha sabido disimular, hacia esta comunidad autónoma. Porque mientras para algunas se solicitan ayudas a la sequía, a otras que andan por ahí se les pide solidaridad.

ASAJA de Castilla y León es totalmente partidaria de que el señor Solbes se muestre reivindicativo en Bruselas y defienda a ultranza los intereses de la agricultura y ganadería española, pero no puede dejar de denunciar que este año sí se hayan solicitado ayudas a la CE para paliar los negativos efectos de la sequía, principalmente, en Andalucía y Extremadura, cuando una de las dos Castillas, aún pidiéndolo en campañas anteriores, no consiguió que el ministro reclamara esta ayuda y tuvo que afrontar prácticamente sola —dado que los créditos bonificados, aún siendo una ayuda, no son precisamente la mejor— la catástrofe.

El hecho de que Solbes se haya decidido por fin a solicitar estas ayudas, cuando Portugal y Francia disponen de ellas desde el año pasado, no creemos que se deba a un cambio racional y positivo de actitud de nuestra Administración, sino, y ya que todo acto se relaciona este año con las elecciones, a su necesidad de pagar alguna obligación contraída con estas comunidades autónomas, gobernadas por sangre de su misma sangre, donde existe un mercado de compra-venta de votos, cuya moneda de cambio son el Plan de Empleo Rural y otros tipos de subsidios y favores.

Y ante esta situación, ASAJA de Castilla y León se pregunta cuánto tendrá que soportar nuestra comunidad autónoma y, por tanto, nuestra agricultura y ganadería este trato discriminatorio, mientras comunidades históricas y no tan históricas disfrutan de todo tipo de privilegios, incluido el respeto al referirse a ellas. Estamos impacientes por saber cuál va a ser la moneda de cambio con la que se piensa pagar la solidaridad que pretender imponer a los castellano-leoneses con los trasvases de agua desde la cuenca del Duero hacia otras tierras.

Agricultura y medio ambiente

JULIO LOPEZ ALONSO

Pte. de la Gestora de UPA en C y L

La reciente reforma de la Política Agraria Común (PAC) recoge, entre sus medidas de acompañamiento, ayudas a la protección del medio ambiente y a la forestación de tierras agrícolas. Las primeras pretenden reducir la utilización de fertilizantes y productos fitosanitarios, extensificar las producciones vegetales y ganaderas y potenciar las prácticas de producción compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente. Por su parte, las medidas de reforestación tienen como finalidad propiciar una alternativa a tierras agrarias y contribuir así a mejorar los recursos forestales y con ello luchar contra las nefastas consecuencias de la ausencia de masas forestales.

Sin duda, el hecho de que la CE incluya estos importantes aspectos dentro de la Política Agraria Común recoge las demandas crecientes de una sociedad que, consciente del progresivo deterioro del medio natural, reclama políticas de lucha contra esa problemática. Pero en la base de todas esas medidas —y de otras pertenecientes a la reforma— se hallan otras motivaciones de carácter económico: la lucha contra los excedentes estructurales y los gastos que generan en el presupuesto comunitario, pugna de Estados Unidos por el control de los mercados mundiales y el consiguiente enfrentamiento de la CE.

Se trata, simplificando mucho, de que el sector agrario comunitario no produzca desequilibrios internos presupuestarios, ni exteriores de competitividad comercial. En todo ello se han tenido en cuenta —sólo en una pequeña parte— los desequilibrios sociales que la aplicación de las medidas restrictivas iban a tener en amplias capas sociales, del mundo agrario y del mundo rural en su conjunto.

Esta motivación que es claramente prioritaria, como se desprende del conjunto de medidas de la reforma, pone en tela de juicio la sinceridad de las medidas de acompañamiento en materia de medio ambiente.

Por su parte, la Administración española, con su posición cicatera y tacaña, ya ha mostrado la autenticidad de su voluntad respecto al medio ambiente: buenas declaraciones de principios asumiendo la letra de los reglamentos comunitarios (está obligada) y dedicando escasísimos recursos para estas ayudas cofinanciadas.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores hemos de insistir en la dimensión social que esta política ha de encerrar. Los agricultores y ganaderos, aunque hayamos contribuido al deterioro del medio natural impulsados también por políticas productivistas, hemos sido agentes de conservación del medio natural y creadores y transmisores de una cultura a la que no se puede condenar y a la desaparición. Queremos cultivar, mejorar, transmitir y preservar una naturaleza —entorno vivien-

te y natural— que hemos heredado y tenemos que dejar en herencia. Por ello no queremos medidas que surjan de la exclusiva intención de servir de colchón a la grave crisis del sector, a la reconversión, o al convencimiento economicista de que en el campo sobra gente. Para la protección del medio ambiente, para evitar el despoblamiento y la desertización, la desaparición del medio rural y su cultura, no sobramos nadie.



Pecados Originales

Para pecar con gusto. Para caer en tentaciones originales.

Hay pecados que tienen nombre y sello de origen para disfrutar con toda garantía de una cuidada elaboración. Son los alimentos tradicionales de

Castilla y León: jamón de Guijuelo,  chorizo de Cantimpalos,  rosado de Cigales,  carne de Avileño,  tinto de Toro,  judías del Barco de Avila,  vinos de Rueda,  del Bierzo,  de la Ribera del Duero... 

Tentaciones de pecado.



Son de Pecado. Descúbralos.





**CADA
DIA**  **Junta de
Castilla y León**
MAS.